



Malcolm Langford
Norwegian Centre for Human Rights
University of Oslo



Aoife Nolan
Human Rights Centre
University of Durham



[en español abajo] [en français ci-dessous]

If you are having trouble viewing this email, click [here](#) to open in a web browser.

Si no puede ver este mensaje, haga clic [aquí](#) para abrir un navegador web.

Si vous ne parvenez pas à lire ce message, cliquez [ici](#) pour l'ouvrir à l'aide du navigateur internet.

ESCR-Justice Monthly Caselaw Update



ESCR-NET CASELAW DATABASE ON ECONOMIC, SOCIAL AND CULTURAL RIGHTS
RELATED JURISPRUDENCE, CASES AND OTHER DECISIONS

Issue 17, January 2011

"Supreme Court of Argentina uses Creative Enforcement Strategies on Environmental Rights"

Mendoza Beatriz Silva et al vs. State of Argentina et al on damages (damages resulting from environmental pollution of Matanza/Riachuelo river). File M. 1569. XL, Supreme Court of Argentina, July 8, 2008

In July 2004, a group of residents of the Matanza/Riachuelo basin filed a suit before the Supreme Court of Argentina against the national government, the Province of Buenos Aires, the City of Buenos Aires and 44 companies seeking compensation for damages resulting from pollution of the basin. In July 2008, the Court issued a decision in which it required the government to take measures to improve the residents' quality of life, remedy the environmental damage, prevent future damage and established an action plan requiring the government agency responsible for the Matanza/Riachuelo basin, ACUMAR, to fulfill specific measures. In its decision, the Court did not expressly adopt a human rights perspective, however, the Court stated that the action plan's objective should be improving the residents' quality of life, and required specific sanitation programs to be adopted to meet the needs of the basin's population. Although the Court did not review the issues of water, sewage sanitation, health and housing with the specificity required by international human rights treaties, the Court did refer to these key issues, setting as a main objective the improvement of quality of life and the needs of the population in general. Furthermore, the Court acknowledged that the contamination of the basin was an abuse of a collective environmental right, requiring action by the authorities.

The most innovative aspect of this case was in the Court's approach to enforcement of the ruling. In this case, the Court created a system of enforcement monitoring and tried to address the difficulties often preventing effective enforcement of obligations by public agencies by ordering coordinated interjurisdictional compliance and setting up an alternative, creative model of court intervention. The Supreme Court delegated the enforcement process to a federal court and created a working group including the national Ombudsman and NGOs that had been involved in the case as non-litigant parties, seeking to strengthen and enable citizen participation in

monitoring enforcement. Throughout enforcement of the decision, the court in charge has sought ways to identify concrete actions and expand the objectives of the judgment. In late 2010, the working group stated that although ACUMAR made efforts to work towards fulfilling the terms of the decision, it had not yet wholly met any of the obligations set forth in the decision and in the plan established by ACUMAR. Therefore, there have been several requests for fines against responsible officials.

Beyond enforcement, this decision has changed the way politics are done in the basin by establishing that the authority in charge of executing the clean-up plan be ACUMAR, an inter-jurisdictional agency, whose function is to correct the issues of poor coordination among agencies and applicable regulations, and to improve the oversight of polluting activities. Furthermore, the decision opened spaces for civil society participation in policy making and monitoring processes. The working group is involved on a permanent basis in monitoring Supreme Court orders, replying to court requests and organizing meetings with grassroots organizations to promote and expand citizen awareness, and to channel the concerns of the basin's residents.

*This multijurisdictional agency, including authorities of the National Executive Power, the Province of Buenos Aires and the City of Buenos Aires, is in charge of executing a comprehensive environmental remedy plan covering the whole basin (Plan Integral de Saneamiento Ambiental de la Cuenca Matanza Riachuelo).

Asociación Ciudadana por los Derechos Humanos, Asociación de Vecinos de la Boca, Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), Fundación Ambiente y Recursos Naturales, Fundación Greenpeace Argentina.

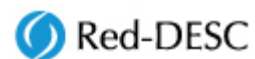
- To see the full case summary and documents, click [here](#).

Get involved!

- Please send new cases and interesting developments in ESC rights jurisprudence to us at rbrown@escr-net.org
- To share information or strategies with other ESCR advocates subscribe to the [justiciability listserve](#).
- To receive future issues of ESCR Justice, join the listserv or check for new monthly posted issues here: http://www.escr-net.org/resources/resources_show.htm?doc_id=890898

Justicia-DESC

Actualización mensual de Jurisprudencia



DE LA BASE DE DATOS DE JURISPRUDENCIA Y OTRAS DECISIONES RELACIONADAS
CON LOS DERECHOS ECONÓMICOS, SOCIALES Y CULTURALES

Número 17, enero de 2011

"La Corte Suprema de Argentina utiliza Estrategias Creativas en el Cumplimiento de los Derechos Ambientales"

Mendoza Beatriz Silva y otros c. Estado Nacional y otros s/ daños y perjuicios (daños derivados de la contaminación ambiental del Río Matanza – Riachuelo). Expediente M. 1569. XL, Corte Suprema de Justicia de Argentina, Julio 8, 2008

En julio de 2004 un grupo de vecinos que residen en la Cuenca Matanza-Riachuelo interpusieron una demanda ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación contra el Estado

Nacional, la Provincia de Buenos Aires, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y 44 empresas para obtener indemnización por daños y perjuicios sufridos como consecuencia de la contaminación de la Cuenca, cese de la contaminación y recomposición del medio ambiente. En julio de 2008, la Corte dictó la sentencia en la que se determinó la responsabilidad que les cabe al Estado Nacional, la provincia de Buenos Aires y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en las acciones destinadas al mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes, la recomposición del ambiente y la prevención de daños futuros y estableció un programa de intervención que obliga a la Autoridad de Cuenca Matanza-Riachuelo (ACUMAR) a seguir un cronograma de actuación de medidas. A fin de asegurar la correcta ejecución de la sentencia, la Corte delegó el proceso de ejecución al Juzgado Federal de Primera Instancia de Quilmes, que tiene que controlar el cumplimiento de la sentencia y creó un Cuerpo Colegiado, conformado por el Defensor del Pueblo de la Nación junto con ONGs que se habían presentado en carácter de terceros, con el fin de fortalecer y habilitar la participación ciudadana en el control del cumplimiento del fallo. En el fallo la Corte no adoptó expresamente una perspectiva de derechos humanos. Sin embargo, plantea que el objetivo del programa de intervención debe ser el mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes y requiere que se adopten programas sanitarios específicos, para satisfacer las necesidades de la población de la Cuenca.

A lo largo de la ejecución del fallo, el juez de ejecución ha buscado el modo de precisar en acciones concretas y ampliar los objetivos de la sentencia. A finales de 2010, el Cuerpo Colegiado señaló que, si bien la ACUMAR había realizado esfuerzos para trabajar en el cumplimiento de la sentencia ordenada, aún no había dado cabal cumplimiento a ninguna de las obligaciones dispuestas en el fallo y en el plan dispuesto por esta misma autoridad. Por esta razón en repetidas ocasiones se ha solicitado la aplicación de multas a los funcionarios públicos responsables. Más allá del cumplimiento del fallo, la sentencia cambió el modo de hacer política en la Cuenca, estableciendo que la autoridad obligada a la ejecución del programa de saneamiento sea la ACUMAR, una entidad interjurisdiccional, cuya función es corregir los problemas de dispersión y superposición de responsables y normativas aplicables y mejorar el ejercicio del poder de la policía sobre las actividades contaminantes. Además, la sentencia abrió instancias de participación social en el diseño y control de las políticas. El Cuerpo Colegiado participa constantemente en el seguimiento de lo ordenado por la Corte, respondiendo a los requerimientos del juez y organizando encuentros con las organizaciones sociales de base para generar y expandir conciencia ciudadana y canalizar las inquietudes de la población de la Cuenca.

Si bien la Corte no analizó los temas de agua, saneamiento cloacal, salud y vivienda con el detalle específico que señalan los tratados internacionales de derechos humanos, se refiere a estos temas centrales poniendo como objetivo principal el mejoramiento de la calidad de vida y la satisfacción de la población en general. Asimismo, La Corte reconoció la existencia de un derecho colectivo vulnerado, que requiere la intervención obligatoria por parte de las autoridades. Además, la creación de un sistema múltiple de control de cumplimiento de la sentencia, reconoce y trata de enfrentar las dificultades que frecuentemente impiden el cumplimiento efectivo de las obligaciones ordenadas a los poderes públicos, abriendo nuevos espacios de participación social en la cuestión pública, exigiendo el cumplimiento interjurisdiccional coordinado y planteando un modelo alternativo y creativo de intervención judicial.

*Entidad interjurisdiccional que incluye autoridades del Poder Ejecutivo Nacional, de la provincia de Buenos Aires y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que tiene a su cargo la ejecución del Plan Integral de Saneamiento Ambiental de la Cuenca Matanza Riachuelo.

Asociación Ciudadana por los Derechos Humanos, Asociación de Vecinos de la Boca, Centro de Estudios Legales y Sociales, Fundación Ambiente y Recursos Naturales, Fundación Greenpeace

Argentina.

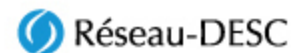
- Para ver el resumen del caso completo y los documentos, haga clic [aquí](#).

¡Participe!

- Por favor envíen nuevos casos y desarrollos interesantes de jurisprudencia sobre DESC a rbrown@escr-net.org
- Para compartir información o estrategias con otros defensores de los DESC, suscríbese a la lista de distribución electrónica de Justiciabilidad a través del siguiente link: http://www.escr-net.org/subscription/subscription.htm?attribLang_id=13441
- Para recibir o consultar futuras ediciones de Justicia DESC, únase a la lista de distribución electrónica o revise nuestra página web en el siguiente link: http://www.escr-net.org/resources/resources_show.htm?doc_id=900318&attribLang_id=13441

Justice-DESC

Actualité jurisprudentielle mensuelle



JURISPRUDENCES, AFFAIRES ET AUTRES DECISIONS LIEES AUX DESC, DE LA
BASE DE DONNEES JURISPRUDENTIELLE DU RESEAU DESC

Affaire n° 17, Janvier 2011

"La Cour Suprême d'Argentine utilise des stratégies créatives d'exécution des droits en matière d'environnement"

Mendoza Beatriz Silva et al contre l'Etat d'Argentine et al sur les dommages (dommages résultant de la pollution environnementale de la rivière Matanza/Riachuelo). Dossier M. 1569. XL, Cour Suprême d'Argentine, 8 juillet 2008

En juillet 2004, un groupe de résidents du bassin du fleuve Matanza/Riachuelo ont poursuivi le gouvernement national, la Province de Buenos Aires, la ville de Buenos Aires et 44 compagnies par-devant la Cour Suprême d'Argentine, en demandant réparation des dommages résultant de la pollution du bassin. En juillet 2008, la Cour a rendu une décision par laquelle elle obligeait le gouvernement à prendre des mesures pour améliorer la qualité de vie des résidents, réparer les dommages environnementaux et prévenir les dommages futurs, et a établi un plan d'action obligeant l'agence gouvernementale responsable du bassin du fleuve Matanza/Riachuelo, ACUMAR, à prendre des mesures spécifiques. Dans cette décision, la Cour n'a pas expressément abordé la question sous l'angle des droits de l'homme. Elle a cependant indiqué que l'objectif du plan d'action devrait être d'améliorer la qualité de vie des résidents, et a exigé que soient adoptés des programmes d'assainissement spécifiques afin de répondre aux besoins de la population du bassin. Bien que la Cour n'a pas examiné les questions de l'eau, de l'assainissement des eaux usées, de la santé et du logement avec la spécificité requise par les traités internationaux des droits de l'homme, la Cour a fait référence à ces questions clés en fixant comme objectif principal l'amélioration de la qualité de vie et les besoins de la population en général. De plus, la Cour a reconnu que la contamination du bassin était un abus du droit collectif à un environnement sain, nécessitant une action de la part des autorités.

L'aspect le plus innovant de ce cas était l'approche de la Cour au sujet de la mise en œuvre de la décision. Dans le cas d'espèce, la Cour a créé un système de suivi de l'exécution et a essayé de

résoudre les difficultés qui empêchent souvent l'exécution d'obligations par les agences publiques, en ordonnant une exécution coordonnée entre les juridictions et en mettant en place un modèle alternatif et créatif d'intervention du tribunal. La Cour Suprême a délégué le processus de mise en œuvre à une cour fédérale et a créé un groupe de travail comprenant la médiateur national et les ONG qui avaient été impliquées dans le cas en tant que parties externes au litige, cherchant à renforcer et à permettre la participation des citoyens dans le suivi de l'exécution. Tout au long de l'exécution de la décision, le tribunal en charge a cherché des moyens d'identifier des actions concrètes et d'étendre les objectifs du jugement. A la fin 2010, le groupe de travail a déclaré que bien que ACUMAR a fait des efforts cette année pour réussir à satisfaire les termes de la décision, elle n'avait pas entièrement respecté les obligations contenues dans la décision et dans le plan établi par ACUMAR. Par conséquent, il y a eu plusieurs demandes d'amende à l'encontre des fonctionnaires responsables.

Au-delà de la mise en œuvre, cette décision a changé la manière dont la politique se fait dans le bassin, en établissant que l'autorité en charge d'exécuter le plan d'assainissement est ACUMAR, une agence inter-juridictionnelle, dont la fonction est de remédier aux problèmes de mauvaise coordination entre les agences et les réglementations applicables, et d'améliorer la supervision des activités polluantes. De plus, la décision a ouvert la voie à la participation de la société civile à l'élaboration des politiques et aux processus de supervision. Le groupe de travail est impliqué de manière permanente dans le suivi des décisions de la Cour Suprême, en répondant aux requêtes de la Cour et en organisant des réunions avec des organisations locales en vue de promouvoir et développer la conscience des citoyens et de canaliser les préoccupations des résidents du bassin.

*Cette agence multi-juridictionnelle, comprenant les autorités du pouvoir exécutif national, de la Province de Buenos Aires et de la Ville de Buenos Aires, est en charge d'exécuter un plan global d'assainissement de l'environnement couvrant tout le bassin (Plan Integral de Saneamiento Ambiental de la Cuenca Matanza Riachuelo).

Asociación Ciudadana por los Derechos Humanos, Asociación de Vecinos de la Boca, Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), Fundación Ambiente y Recursos Naturales, Fundación Greenpeace Argentina.

Ci-jointe vous trouverez le numéro suivant de Justice-DESC, une mise à jour mensuelle mettant en lumière une affaire importante liée aux Droits Économiques, Sociaux et Culturels, ajoutée à la base de données jurisprudentielle. L'édition de Justice-DESC résume une décision par la COURT et l'accès aux la TOPIC.

Impliquez-vous!

- Veuillez envoyer de nouvelles affaires et des développements intéressants dans la jurisprudence relative aux Droits économiques, sociaux et culturels à rbrown@escr-net.org.
 - Pour partager des informations ou des stratégies avec d'autres militants des DESC, abonnez-vous à la liste de diffusion Justiciabilité.
 - Pour recevoir les prochains numéros de Justice DESC, vous pouvez rejoindre la liste de diffusion ou vous pouvez vérifier la publication de nouveaux numéros mensuels sur : http://www.escr-net.org/resources/resources_show.htm?doc_id=904554
-



©2016 ESCR-Net | New York, NY, US

[Web Version](#)

[Forward](#)

[Unsubscribe](#)

Powered by **Mad Mimi**®
A GoDaddy® company